

La militarización de la vida y la seguridad pública: amenazas a la estabilidad democrática y la paz en México

México: entre la militarización y el militarismo

Prólogo

En 2021, en México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) publicamos la serie “La militarización de la seguridad pública: impidiendo la construcción de un México más seguro y en paz”, donde recabamos información y evidencia sobre cómo la militarización de la seguridad pública aumenta las violaciones a derechos humanos y no detiene la violencia en el país. A pesar del fracaso de esta estrategia, la militarización se ha profundizado al punto en que no solo continúa la impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidas por militares y el debilitamiento de la vía civil de seguridad, sino que, además, se ha dado un fenómeno mucho más grave: la militarización de la vida pública y del gobierno civil en México.

Una muestra de ello es la expansión acelerada de las funciones de gobierno civil transferidas a las Fuerzas Armadas (FFAA) que, de acuerdo con el [“Inventario Nacional de lo Militarizado”](#),¹ han ascendido a 227 tareas en los últimos 12 años, las cuales se relacionan no solo con la seguridad pública, sino también con educación, migración, protección civil, puertos, obras públicas y política social. Lo anterior ha significado un traspaso presupuestario de, al menos, \$4.5 mdp² de entidades federativas y \$4,531 mdp de recursos originalmente asignados a instituciones

¹ Investigación realizada por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). En adelante “el Inventario”. La investigación requirió del envío de 42 solicitudes de información, la interposición de 19 recursos de revisión y 6 inconformidades. El registro terminó el 24 de junio de 2021. No obstante, la lista de funciones civiles trasladadas a las FFAA que fueron registradas por el Inventario no es exhaustiva, de igual forma los recursos calculados por el traspaso de funciones no son definitivos, puesto que mucha información se reserva volviendo imposible conocer los montos totales.

² Entiéndase “millones de pesos”.

civiles. Con la suma de estos montos, que ascienden a casi \$4,535 mdp, podrían financiarse hasta 539,911 becas Benito Juárez³ o hasta 472,422 apoyos por un año del programa para el Bienestar de las Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras.⁴

La transferencia de dichas funciones es preocupante por su magnitud, además de las implicaciones económicas y políticas que representa incrementar los presupuestos, poder y autonomía de las FFAA frente a las autoridades civiles, pues pone en riesgo la gobernabilidad democrática y el Estado de derecho. Esta nueva serie busca visibilizar las diferentes repercusiones del fenómeno de la militarización de la vida pública, sus consecuencias y riesgos para la ciudadanía, por medio de la sistematización de información y evidencia recabada por distintos actores críticos, como la academia, el periodismo y las organizaciones de la sociedad civil, traducidas en un lenguaje sencillo y accesible para el público en general.

En específico, este primer documento contiene una reflexión sobre los límites de la militarización y se pregunta si éstos se han transgredido o no para hablar entonces de un nuevo militarismo civil en el que las FFAA ya no son solo un actor operativo sino estratégico e incluso político. Para responder a esta pregunta, el texto reúne, en una primera etapa, distintas definiciones de militarismo para luego contrastarlas con aquellas de militarización, poniendo especial énfasis en cómo ambos procesos se refuerzan mutuamente normalizando la presencia de valores y estructuras militares entre la población. Posteriormente, el texto caracteriza la realidad de México haciendo un breve recuento histórico sobre las relaciones cívico-militares y describiendo los momentos y argumentos con los que distintos gobiernos civiles han aumentado la participación militar en tareas ajenas a la disciplina castrense. Por último, se analiza el momento nacional actual a la luz de los conceptos previamente discutidos y se presentan conclusiones sobre este posible tránsito de la militarización al militarismo.

³ Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, "Beca para el Bienestar Benito Juárez de Educación Básica", Gobierno de México, 9 de febrero de 2022, <https://bit.ly/30V7517>

⁴ Presidencia de la República, "Apoyo para el bienestar de las niñas y niños hijos de madres trabajadoras", consultado el 5 de noviembre de 2022, <https://bit.ly/3SicD8R>

Introducción

En los últimos años, en México hemos presenciado un proceso de militarización de distintas funciones civiles que trasciende la esfera de la seguridad. Si bien los militares han participado históricamente en políticas de control de drogas y erradicación de cultivos, fue desde los gobiernos de Ernesto Zedillo y Vicente Fox cuando se advierte una creciente participación de militares en tareas de seguridad pública, la cual se consolidó hace 15 años con el despliegue permanente de las FFAA en el gobierno del presidente Felipe Calderón.⁵ En diciembre de 2006, el presidente declaró que el crimen organizado representaba una amenaza a la seguridad nacional y con ese argumento decidió adoptar una política de enfrentamiento con estas organizaciones basada en el despliegue permanente de las FFAA en distintos estados del país. Desde entonces, los siguientes gobiernos le han apostado a esta estrategia a pesar de su fracaso para reducir la criminalidad organizada o el tráfico ilegal de drogas⁶. Lo anterior, sin reparar en sus lamentables efectos sobre la inseguridad, la violencia, la impunidad y las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares.⁷

A pesar de que, como candidato, Andrés Manuel López Obrador prometió que regresaría a los militares a los cuarteles, tras ser electo a la presidencia propuso la creación de la Guardia Nacional, un cuerpo nominalmente civil, pero de entrenamiento, estructura y mando militares, que desde sus inicios tendría el apoyo directo de las FFAA hasta el 2024 (plazo que posteriormente fue ampliado hasta el 2028, gracias a una reforma constitucional aprobada en septiembre de 2022). Desde entonces, la militarización se ha profundizado de manera todavía más drástica, llegando a áreas del gobierno civil que poco o nada tienen que ver con la seguridad pública. Adicionalmente, su crecimiento y presencia numérica a lo largo y ancho del territorio nacional dan cuenta de un fenómeno preocupante ya no solo por su nula efectividad sino por sus costos y acumulación de poder. En una conferencia de prensa ofrecida el 22 de enero de 2022, el Secretario de Defensa Nacional anunció que se han desplegado un total de 148,537 militares en el país, casi tres veces más que los mayores despliegues en los gobiernos anteriores.⁸ Sin embargo, un cálculo más reciente realizado por el programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana calcula que actualmente hay 239,865 militares desplegados en el país.⁹ Esto es 4 veces más que en el gobierno de Felipe Calderón, que en su mo-

⁵ Para una exploración de los precedentes de la militarización de la seguridad antes de este gobierno consultar Lisa María Sánchez Ortega, La militarización de la seguridad pública en México y sus fundamentos legales, (Bogotá: Friedrich-Ebert-Stiftung, noviembre 2020). <https://bit.ly/3EyGS6D>

⁶ Un estudio del *Harvard Institute of Politics* encontró que para 2012, el 95% de la cocaína consumida en Estados Unidos pasaba por México, y que organizaciones mexicanas eran las principales proveedoras de anfetaminas y marihuana para el público estadounidense. Institute of Politics, "The War on Mexican Cartels. Options for U.S. and Mexican Policy-Makers", *Harvard University*, 2012. <https://bit.ly/3hcglpN>

⁷ Para más información sobre los efectos en la violencia y las violaciones a derechos humanos de la militarización ver: Carlos Galindo. "Prohibición de drogas y combate frontal al narcotráfico". *Temas Estratégicos*. No. 37. Instituto Belisario Domínguez, Senado de la República. 2016. <https://bit.ly/3vf9zSB>; Julio Salazar y Eduardo Cadena "La militarización: no detiene la violencia". *México Unido Contra la Delincuencia*. Marzo 2021. <https://bit.ly/37ITyit>; Frida Ibarra "La militarización: causando la violación de derechos humanos" *México Unido Contra la Delincuencia*. Marzo, 2021. <https://bit.ly/3ruBTgB>

⁸ Presidencia de la República, "Versión estenográfica. Conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador del 20 de enero de 2022", Gobierno de México, 20 de enero de 2022, <https://bit.ly/3Rkfg0J>

⁹ Ernesto López Portillo, "De Fox a AMLO, siete veces más militares en las calles", *Animal Político* (blog), 13 de junio de 2022, <https://bit.ly/3AMsHK0>

mento cúspide llegó a desplegar 52,690 militares en el país.¹⁰ El actual presidente ha expresado repetidamente su confianza en los militares y ha perpetuado la idea de que son la única institución efectiva y limpia de corrupción, al punto que en los últimos años les ha entregado muchas tareas que le corresponden a civiles. Con esa excusa, los militares participan en la administración de puertos y aduanas, la construcción de proyectos de infraestructura y el reparto de apoyos sociales.

Desde que este fenómeno empezó a adquirir dimensiones preocupantes en 2006, activistas y académicos han documentado los riesgos y consecuencias negativas que el sobreuso de militares en tareas ajenas a su disciplina genera, tanto para las personas como para las comunidades y las instituciones del Estado Mexicano. Este ejercicio ha continuado en la actualidad, intentando dar luz acerca de su magnitud y de las distintas formas que la militarización ha adquirido, dentro y fuera de la seguridad pública. Así, por ejemplo, investigadores del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana han identificado que la militarización en México ha adquirido al menos cinco formas: 1) la militarización directa, donde el Estado depende de militares para realizar tareas de seguridad pública; 2) la militarización indirecta, cuando instituciones civiles de seguridad adquieren características y lógicas militares; 3) cambios estructurales al interior de las FFAA para incorporar a su quehacer las distintas tareas de seguridad pública que se les han conferido; 4) el uso de la influencia política por parte de los militares para impulsar reformas legales e institucionales que justifiquen su presencia en estas funciones; y 5) un proceso similar al militarismo que se expresa de manera más clara en este gobierno y desata nuevas preocupaciones.¹¹

¿Por qué? Porque el militarismo es una ideología que supone que las estructuras y valores militares son superiores a las civiles y aspira a una mayor participación política de las FFAA en la toma de decisiones y en el desempeño de tareas de la administración pública. Y si bien en América Latina éste se asociaba con las dictaduras militares del pasado, en los últimos años parecería encontrarse también en las decisiones de gobiernos civiles de distintas reivindicaciones ideológicas que han recurrido a la militarización de distintas áreas de la administración pública trayendo como consecuencia que en muchos países la participación de las FFAA en el ejercicio del gobierno se profundice.

Tomando esto en consideración, resulta imperante reflexionar de manera crítica sobre el tipo de proceso que vive nuestro país, de manera que se puedan identificar sus implicaciones y riesgos, así como las alternativas civiles y democráticas a partir de las cuales será posible detenerlo y, en última instancia, revertirlo. En ello nos jugamos nuestra seguridad y la estabilidad democrática del país.

¹⁰ Catalina Pérez-Correa, 2015. "México 2006-2012: una revisión de la violencia y el sistema de justicia penal". Derecho en Acción. <https://bit.ly/3tngzd9>

¹¹ Ernesto López Portillo, y Samuel Storr. "De La Militarización al Militarismo, ¿ciclo Incontenible?" *Este País*, 1 de octubre de 2021. <https://bit.ly/3Jl26yy>

Militarismo y militarización

A pesar de la diversidad de definiciones, el consenso académico describe a la militarización como un aumento progresivo de la presencia, poder y facultades de las FFAA en funciones que le corresponden a autoridades y actores civiles.¹² Este concepto, estudiado principalmente desde su relación con la seguridad pública, supone que ésta puede incluir elementos como la participación de militares en tareas policiales, la subordinación de policías a autoridades militares, el nombramiento de oficiales militares en puestos clave de la seguridad y/o la incorporación de características militares a la estructura de agencias de seguridad pública.¹³ Fuera de la seguridad pública, la militarización es la tendencia por la que los militares y sus instituciones extienden su participación en el gobierno civil de un país, desplazando y sustituyendo a los civiles.¹⁴ A diferencia de otros momentos históricos en América Latina, donde esta tendencia estaba asociada con gobiernos autoritarios y militares, en la actualidad este fenómeno se observa en países con regímenes democráticos donde gobiernos tanto de izquierda como de derecha y de centro lo impulsan de manera voluntaria.¹⁵

El militarismo, por su parte, no tiene una definición tan clara. En el contexto de la Guerra Fría, el término se utilizó para estudiar contextos muy distintos, desde gobiernos militares en América Latina hasta la preparación de distintos gobiernos para la guerra con un enemigo externo -sin que académicos lograran alcanzar un consenso sobre su definición-.¹⁶ Por ello, en la década de 1960, estudiosos de Latinoamérica comenzaron a verlo con escepticismo por considerarlo un término ideológico y de poca utilidad para comprender la realidad de nuestros países. En contraste, optaron por analizar las relaciones cívico-militares, considerando que esto tendría mayor valor analítico.¹⁷ Esta falta de consenso se refleja en el uso del concepto para referirse a situaciones muy distintas, incluyendo la descripción de ideologías que consideran que la preparación para la guerra es algo deseable o que justifican la extensión de lo castrense a esferas civiles y la participación "excepcional" de las FFAA en tareas de seguridad.¹⁸ De manera más reciente, distintos autores han recuperado el valor de este concepto para describir ideologías que aspiran a que las estructuras, lógicas y objetivos militares del Estado tengan dominio sobre sus contrapartes civiles.¹⁹

¹² Ignacio Cano citado en Lisa María Sánchez Ortega. *Militarización y Pandemia en el México de 2020*. (Bogotá: Friedrich-Ebert-Stiftung, noviembre 2020), 5. <https://bit.ly/38HIYsa>

¹³ Ignacio Cano. "Militarización de la seguridad y el regreso de los militares a la política", Bogotá: Congreso de Seguridad Incluyente y Sostenible: analizando los desafíos y pensando soluciones, 2019 citado en Lisa María Sánchez Ortega. *La Militarización de la Seguridad Pública en México y sus fundamentos legales* (Bogotá: Friedrich-Ebert-Stiftung, noviembre 2020), 5. <https://bit.ly/3v2DHPD>

¹⁴ Marco Tulio Mérida "Poder Militar y control civil en la Venezuela contemporánea". *Mañongo* 11, No° 20, Año 11 (2003), 3.

¹⁵ Antonio Jorge Ramalho, Rut Diamint y Lisa Sánchez. *La militarización de la seguridad y el regreso de los militares a la política en América Latina*. (Bogotá: Friedrich-Ebert-Stiftung, Febrero 2020), 8. <https://bit.ly/3PjUJrk>

¹⁶ Para saber más consultar Volker Rolf Berghahn, *Militarism: The history of an international debate, 1861-1979*, (Warwickshire: Berg Publishers, 1981); Francisco J. Verdes-Montenegro Escáñez. "La (re)militarización de la política latinoamericana." Fundación Carolina. Documentos de Trabajo 14/2019. <https://bit.ly/3KNqhg9>

¹⁷ Verdes-Montenegro. "La (re)militarización de la política latinoamericana.", 5. <https://bit.ly/3KNqhg9>

¹⁸ Anna Stavrianakis, y Maria Stern. "Militarism and Security: Dialogue, Possibilities and Limits". *Security Dialogue* 49, n.º 1-2 (1 de febrero de 2018), 5-7. <https://bit.ly/3v2Fc0l>

¹⁹ Verdes-Montenegro Escáñez. "La remilitarización de la política latinoamericana.", 6-8;

Cynthia Enloe considera que el militarismo es una ideología que pone énfasis en la superioridad de los valores y estructuras militares sobre las civiles.²⁰ Estos valores tienen que ver con un entendimiento de la manera en que funciona el mundo y lo que es correcto e incorrecto. Por ejemplo, que la fuerza armada es la mejor forma de resolver conflictos en una sociedad, que la existencia de enemigos es una condición natural, que las relaciones jerárquicas son una manera efectiva de conseguir resultados y que, en tiempos de crisis, es natural y deseable que los hombres participen en acciones violentas para proteger a las mujeres. La militarización, por su parte, sería el proceso sociopolítico por el cual dicha ideología recibe legitimidad y aceptación entre el público en general de un país, al punto que las personas comienzan a creer que la vía militar es la mejor o única forma de resolver los problemas.²¹ Se entiende que este proceso es menos una lucha y más un tipo de baile cotidiano y sutil donde, poco a poco, las personas empiezan a ser controladas por ideas militaristas o a creer que su bienestar depende de éstas.²²

Construyendo sobre esta relación entre militarismo –como ideología- y militarización –como proceso-, Arlene Beth Tickner pone el foco en la reproducción de las ideologías militaristas a nivel micro.²³ Para ella, pensar en una división tajante entre la esfera civil y militar ignora que, en la cotidianidad, existen ya prácticas e ideas violentas que reproducen la ideología militarista. Un ejemplo de ello está en la participación “excepcional” de las FFAA en tareas de seguridad, que ha sido donde empiezan muchos procesos de militarización y que implica una suspensión de derechos para enfrentar a un enemigo que constituye una supuesta amenaza existencial. Tickner pone especial atención en esta “excepcionalidad” y afirma que, en la realidad de muchos Estados modernos, esta ruptura del orden –legal e institucional- universal que les aplica a todos los ciudadanos ya no es en absoluto excepcional pues se usa cada vez más para tratar a distintos grupos y minorías. En este sentido, considera que las jerarquías de género, raza, etnia y sexualidad representan un espacio cotidiano en el que se empieza a aceptar la exclusión del régimen normativo, lo que puede a su vez ser aprovechado e instrumentalizado por el militarismo. Por ello, estudiar la manera en que estos factores micro reproducen ideologías militaristas es tan importante para buscar maneras de desmilitarizar a un país como conocer factores macro, como la debilidad institucional o la situación de inseguridad.²⁴

En América Latina, Dirk Kruijt y Kees Koonings resaltan que, en las dictaduras militares, el predominio de instituciones castrenses para justificar la intervención en la vida nacional no estaba basado en un enemigo externo. En cambio, el militarismo

²⁰ Cynthia Enloe, “Understanding Militarism, Militarization, and the Linkages with Globalization”, en *Gender & militarism: Analyzing the links to strategize for peace*. Women Peacemakers Program, 2014, 7, <https://bit.ly/3xw5utl>

²¹ Enloe, “Understanding Militarism, Militarization” 8-9.

²² Cynthia Enloe, *Maneuvers: The International Politics of Militarizing Women's Lives*, (Berkeley: University of California Press, 2000), 3 en Arlene B. Tickner, “Hacia una lectura crítica del militarismo y la militarización”, *Fundación Carolina. Análisis Carolina* N° 4/2022, 3 de febrero de 2022, 3. <https://bit.ly/3PsYt3c>

²³ Tickner, “Hacia una lectura crítica del militarismo y la militarización”, 4.

²⁴ Tickner, “Hacia una lectura crítica del militarismo y la militarización”, 3-7.

funcionaba como un tipo de discurso autoproclamado por el Ejército, que justificaba su participación en la política como un actor que protegía la integridad del Estado. En esta concepción, los militares tomaban el poder para enfrentar a algún enemigo interno que amenazaba dicha integridad, con frecuencia asociado con el comunismo. Tras la Guerra Fría, quedan “restos” de este militarismo que siguen influyendo en los países, por ejemplo, la ausencia de controles democráticos, la alta confianza pública en instituciones militares, la escasez de experiencia técnica entre civiles en temas de seguridad e inteligencia y el creciente rol militar en tareas de lucha contra el crimen. En particular, identifican que esto último está llevando a una mayor militarización en varios países de la región.²⁵

De manera similar, Julio Ríos y Carlos Bravo Regidor limitan el concepto de militarización a la seguridad pública, y definen al militarismo como un proyecto que busca que las FFAA se conviertan en un actor político que asume tareas que corresponden a grupos e instituciones civiles. Ejemplos de este militarismo son la idea en Brasil de las FFAA como un “poder moderador” que garantiza la estabilidad del sistema político, o la presencia de los militares en Chile como un actor fundamental del sistema político durante el Siglo XX, antes incluso del golpe militar de 1973. Aunque el uso del Ejército como sustituto de una institución se modera con la transición democrática, los roles históricos de los militares dejan legados políticos en las instituciones con los cuales los países aún tienen que lidiar.²⁶

En contraste, Rut Diamint observa que en la región ha aumentado la participación de militares en distintas áreas de la administración pública y en la toma de decisiones políticas, y considera que esto constituye un nuevo tipo de militarismo. Las intervenciones previas para imponer dictaduras militares solían tener objetivos conservadores y antidemocráticos, donde grupos oligárquicos que veían sus privilegios amenazados llamaban a los militares a intervenir en la política. En la actualidad, lo que ocurre es un “nuevo militarismo”, en el que la popularidad de las FFAA lleva a que intervengan por la invitación de gobernantes civiles democráticamente electos, que los utilizan como aliados, y ocasionalmente sustitutos, de instituciones civiles. Todo esto limita la consolidación de instituciones civiles que respondan a controles democráticos e incluso puede poner en riesgo la estabilidad democrática.²⁷

Si bien este llamado es desde los civiles, Diamint considera que los militares obtienen muchos beneficios de la situación y actúan de manera autónoma para proteger y expandir estos beneficios al punto que en muchos países de la región representan un partido de facto, que en muchos casos es uno de los más fuertes.²⁸

²⁵ Dirk Kruijt y Kees Koonings. “From political armies to the ‘war against crime’ The transformation of militarism in Latin America.” En Anna Stavrianakis y Jan Selby (eds.) *Militarism and International Relations. Political economy, security, theory*. (Nueva York: Routledge, 2013) 91–95 100–103.

²⁶ Bravo Regidor, Carlos, y Julio Ríos. “México: de la militarización al militarismo”. *El País México*, 2 de diciembre de 2020. <https://bit.ly/3JFTUP7>

²⁷ Rut Diamint, “A New Militarism in Latin America”, *Journal of Democracy*, 2015, 26(4), 156–158. <https://bit.ly/3JJdn1s>

²⁸ Diamint, “A New Militarism”, 162-163

Los militares ya no llevan a cabo golpes de Estado,²⁹ pero el control civil sobre ellos sigue estando muy limitado, y con frecuencia mantienen prerrogativas sobre presupuestos, tareas de administración pública e incluso actividades productivas, las cuales son muy difíciles de retirar por la necesidad de mantener una buena relación con el sector castrense por la dependencia en éste para muchas tareas. En Ecuador, por ejemplo, las promesas del gobierno de Rafael Correa de quitarle a los militares numerosas empresas productivas no progresaron, en especial después de que el Ejército protegió al gobierno tras una rebelión de policías. La autonomía de facto bajo un gobierno civil es posiblemente el mejor arreglo para los militares: no deben preocuparse de llevar a cabo golpes de Estado para aumentar su poder porque ya poseen amplias y crecientes prerrogativas, y al mismo tiempo pueden beneficiarse de la legitimidad democrática del presidente.³⁰

Con todo ello, podemos definir al militarismo como una ideología que aspira a que los valores, formas de ver el mundo y estructuras militares se vuelvan dominantes sobre el Estado, y a la militarización como el proceso por el que se reproduce y consolida esta ideología entre la población.³¹ En la cotidianidad, esto ha comenzado con una militarización de la seguridad, que cambia las concepciones sobre el lugar que tienen las FFAA en la sociedad y lleva a una infiltración de estos valores, que permiten justificar la mayor participación militar.³² En los últimos años, el militarismo ha estado menos asociado a minorías que llaman a los militares a intervenir en la política para proteger sus privilegios, y más con autoridades civiles electas democráticamente, que aprovechan la legitimidad de los militares para llamarlos a resolver problemas graves. En estas situaciones, los militares tienen acceso a beneficios como recursos, prerrogativas y autonomía, y pueden actuar como un tipo de actor político que busca aumentar estos beneficios y proteger lo que ya les han entregado gobiernos civiles. Al mismo tiempo, mantienen una legitimidad por ser nominalmente parte de un gobierno democrático que no tendrían bajo una dictadura militar.³³

²⁹ Aunque sí han participado como un actor importante en las caídas de gobiernos civiles en Honduras en 2009, Paraguay en 2012 y Bolivia en 2019. Diamint, "A New Militarism", 157; Diamint, "A New Militarism", 164-165.

³⁰ Enloe, "Understanding Militarism", 4; Enloe Manuevers: The International Politics, 3.

³¹ Enloe, "Understanding Militarism", 4; Enloe Manuevers: The International Politics, 3.

³² Tickner "Hacia una lectura crítica del militarismo y la militarización", 3-4; Kruijt y Koonings. "From political armies to the 'war against crime'", 100-103.

³³ Diamint. "A New Militarism". 156-163

La situación en México

A diferencia de otros países de la región que tuvieron dictaduras militares, en México existió una forma de control civil imperfecta basada en la subordinación al presidente, la cual se respetó desde finales de la década de 1930 hasta el fin del régimen de partido hegemónico y los primeros gobiernos de la transición.³⁴ Durante 70 años, los militares respondían a las órdenes del presidente en el poder y, si bien inicialmente tenían un sector para representar sus intereses en el PRI, para 1946 el partido eliminó su sector, fortaleciendo en teoría el control de los militares. A pesar de ello, durante el régimen priista, los militares tomaron tareas no vinculadas con su disciplina militar, como la represión de movimientos sociales subversivos y el combate a la producción y distribución de drogas. A cambio de esto y de la obediencia al presidente, se les permitió mantener prerrogativas y espacios de autonomía hacia su interior, así como estar relativamente aislados de las críticas al régimen.

Si bien la transición a la democracia electoral mostró que la esfera militar seguiría las ordenes de un presidente de un partido distinto al PRI, el control civil de los militares permaneció como tarea pendiente. Por un lado, los gobiernos emergidos de la transición no quisieron llevar a cabo las reformas democráticas necesarias del sector seguridad para fortalecer el control civil sobre los militares, y por el otro, profundizaron su dependencia respecto a las FFAA para realizar tareas de seguridad pública. Esto llevó a que aumentaran los presupuestos asignados a las instituciones castrenses lo mismo que sus tareas, al punto que su participación en tareas de seguridad pública se normalizara y profundizara. Este efecto ha sido tan considerable que los gobiernos posteriores al de Felipe Calderón, que en campaña prometieron revertir la militarización, acabaron creando cuerpos que operaban bajo una lógica militar y dependían de las FFAA para operar.³⁵

Pero eso no es todo. El proceso de militarización que estamos presenciando en México está siguiendo la ideología del militarismo en por lo menos cuatro principales aspectos: la promoción de discursos por el gobierno que enfatizan la superioridad de los valores, estructuras y cuerpos militares; la aceptación entre la población de estos discursos, al punto de apoyar una posible intervención militar en el gobierno;³⁶ la asignación de funciones de administración pública a los militares bajo el argumento de que éstos son más capaces y menos corruptos; y la creciente autonomía de los militares para ser un actor político que defiende sus propios intereses.

³⁴ Jorge Javier Romero Badillo. "El mito del Ejército incorrupto". *Etcétera*, 16 de octubre de 2020. <https://bit.ly/3lJHmb8>

³⁵ Raúl Benítez Manaut. "Militarización con respaldo popular. La transición militar en México, 2000-2020". En Catalina Niño Guarnizo y Juan Andrés Valderrama (coord.) *Militares y Gobernabilidad ¿Cómo están cambiando las relaciones cívico-militares en América Latina?* Bogotá Colombia: Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia, 2021, 3-11. <http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/18384.pdf>

³⁶ Diamint. "A New Militarism". 157; Daniel Zizumbo-Colunga y Benjamín Martínez-Velasco. "Militarización en tiempos de pandemia: Una exploración de las experiencias, percepciones y preferencias de la ciudadanía" *Programa de Política de Drogas del CIDE*, noviembre de 2021. <https://bit.ly/3M8FaKl>

Los discursos sobre la superioridad y valores militares

Cuando Felipe Calderón extendió la militarización, justificó el despliegue permanente de militares en tareas de seguridad pública por medio de discursos militaristas que planteaban los problemas de seguridad pública del país en términos de guerra. En su Plan Nacional de Desarrollo, el gobierno afirmó que el crimen organizado representaba una amenaza a la seguridad nacional que solo podía ser enfrentada utilizando a las FFAA y que “asegurar y garantizar el Estado de derecho” solo se lograría con el “combate frontal y eficaz al narcotráfico y otras expresiones del crimen organizado”.³⁷ El presidente planteó esta política en términos bélicos y, aunque intentó cambiar el discurso a finales de su sexenio, su uso del término “guerra” para hablar de la estrategia está muy bien documentado.³⁸

Para Alejandro Madrazo, la decisión de utilizar el marco de guerra permitió construir una imagen del narcotraficante en el imaginario popular, que sirvió para legitimar la intervención militar. Al presentarlo como un enemigo de la nación, lo excluía de la comunidad política y lo presentaba como una amenaza ajena, lo que permitía excluirlo retóricamente de estar protegido por la ley y justificar el uso excesivo de la fuerza contra éste. Asimismo, esto permitía apelar a un patriotismo que aumentara el apoyo de la sociedad mexicana a la intervención militar.³⁹ Este discurso también celebraba a las FFAA como un cuerpo valiente, capaz y mejor equipado para enfrentar al crimen organizado que sus contrapartes civiles.

El mismo discurso continuó replicándose durante la administración de Enrique Peña Nieto, que a pesar de afirmar que las FFAA no podían ser el único eje de la seguridad y criticar la estrategia previa por exacerbar la violencia, siguió utilizando lenguajes de combate y propuso un marco normativo para permitir su participación en seguridad pública.⁴⁰

En la administración de Andrés Manuel López Obrador, el discurso celebra aún más la superioridad de los militares sobre los civiles y sirve para defender una política de militarización de la administración pública. Esto pese a que, antes de ser electo, Andrés Manuel López Obrador fue sumamente crítico de las FFAA en sus campañas de 2006, 2012 y 2018 y como candidato afirmó repetidamente que, al llegar al poder, regresaría a los militares a los cuarteles y construiría una policía profesional. En términos discursivos, afirmaba que el Ejército era una institución represiva del Estado neoliberal que violaba derechos humanos y formaba parte de la mafia del

³⁷ Presidencia de la República, *Plan nacional de desarrollo 2007-2012*. (México: Cámara de Diputados LX Legislatura, 2007), <https://bit.ly/3t84ngd>

³⁸ Bravo Regidor, Carlos. “Una ayudadita de memoria para Felipe Calderón”, *Nexos*, 28 de enero de 2011. <https://bit.ly/3zyQ60q>

³⁹ Alejandro Madrazo, “Criminales and enemies? the drug trafficker in Mexico’s political Imaginary”. *Mexican Law Review*, VIII n° 2, 1 de enero de 2016), 55-56. <https://bit.ly/3S2zszj>

⁴⁰ Rebeca Calzada. “Making Enemies: A Discourse Analysis of the Militarization of Public Security in Mexico”. Tesis de maestría, Universidad de Maastricht, 2019. 39-43. <https://bit.ly/3BfE25s>

poder e incluso, en 2017, los acusó abiertamente de participar en la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Sin embargo, al llegar a la presidencia, cambió su discurso enfatizando que son una institución honesta, leal y eficaz, y con ello justificó entregarle nuevas funciones.⁴¹

Una manera en que ha impulsado este cambio es por medio de la idea del Ejército como el pueblo uniformado. Esta construcción moral enfatiza la idea de que los soldados mexicanos no pertenecen a la oligarquía, sino que vienen de orígenes humildes y que el Ejército como institución tiene orígenes revolucionarios. También enfatiza su cercanía con el pueblo en operativos de atención a desastres y en su participación en la construcción de proyectos de infraestructura, donde también agradece repetidamente su lealtad al régimen. Por ello, el presidente ha expresado que el Ejército es un pilar fundamental de su proyecto de “Cuarta Transformación” del país.⁴² El gobierno también ha enfatizado la superioridad de los militares a los civiles al hablar de su participación en proyectos de obras públicas y afirmar que éstos son mucho más eficientes y menos corruptos que los civiles, a pesar de que su desempeño ha sido más opaco y que muchos de estos proyectos han excedido sus presupuestos iniciales.⁴³

Si bien su discurso enfatiza de manera abstracta la superioridad de los militares, también tiene aspectos muy particulares. La idea de superioridad militar a los civiles, en términos de ser más capaces, tener estructuras más organizadas y ser menos corruptas en comparación con los civiles, tiene orígenes en gobiernos previos, en gran medida para promover la asignación de tareas de seguridad pública a los militares.⁴⁴ La diferencia fundamental aquí es que AMLO asocia directamente su discurso no solo a los militares, sino también al hecho de que ahora él es su líder. Así, él enfatiza en su discurso que son la única institución confiable y al celebrar su superioridad, minimiza o ignora la existencia de élites militares, sus casos de corrupción y considera que la represión de opositores no podría ocurrir porque él no la ordenaría.⁴⁵ En ese sentido, hay al mismo tiempo una celebración de su efectividad, su honestidad y su humildad, junto con una atribución de cualquier problema del pasado con las FFAA a sus líderes civiles y no a las estructuras militares en sí mismas.

⁴¹ Raúl Benítez Manaut. “Militarización con respaldo popular” 13-15.

⁴² Andrés Manuel López Obrador. “Discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador en el Día del Ejército Mexicano, desde Santa Lucía, Estado de México”. *AMLQ*, 19 de febrero de 2021. <https://bit.ly/3EFP3ga>

⁴³ Barragán, Sebastián. “Crearé AMLO empresa militar para manejar obras públicas”. *Aristegui Noticias*, 10 de febrero de 2022. <https://bit.ly/3L571e5>

⁴⁴ José Luis Piñeyro. (2010). “Las fuerzas armadas mexicanas en la seguridad pública y la seguridad nacional.” En A. Alvarado y M. Serrano (eds.), *Los Grandes Problemas de México. Seguridad nacional y seguridad interior*. México D. F.: El Colegio de México, 2010, 162.

⁴⁵ Manetto, Carmen Morán Breña, Francesco. “López Obrador se abraza a la buena imagen del Ejército”. *El País México*, 6 de diciembre de 2021. <https://bit.ly/3y4kEsp>

La aceptación de los discursos entre la población

Estos discursos y acciones militaristas del gobierno reciben una amplia aceptación por varios sectores del país, lo que a su vez contribuye a una mayor militarización. En seguridad pública, la participación militar implicó un cambio en las percepciones sobre los aspectos que son deseables en cuerpos encargados de estas tareas. Independientemente del fracaso de estas intervenciones, la militarización llevó a que las estructuras y operativos castrenses comenzaran a ser concebidos como legítimos y deseables para la seguridad pública. Esto, a su vez, propició que otras instituciones policiales buscaran asemejarse a los militares para aprovechar este cambio y ser percibidas como legítimas por la población. Gobiernos estatales y municipales buscaron militares para dirigir policías y secretarías estatales, y a tomar prestado armas y equipamiento militar para sus tareas de seguridad pública.⁴⁶ En otras palabras, la aceptación entre la sociedad de ideologías y concepciones militaristas llevó a que la legitimidad en la seguridad se vinculara directamente a aspectos militares, lo que alimentó todavía más este proceso.

Cuantificar la recepción de estas ideas entre la población es difícil, pero podemos verlo en la confianza en las instituciones militares, que se mantuvo alta incluso después de que la política aumentó la violencia y se volvió más controversial en el país. De acuerdo con el Latinobarómetro, el promedio de la población que expresaba confiar algo o mucho en las FFAA entre 1995 y 2006 fue de 46%, mientras que entre 2007 y 2016 fue de 60%. Aunque el crecimiento en la confianza comenzó antes de la participación militar y hubo una reducción en esta cifra tras ese año, en 2007 la confianza llegó a su cifra más alta con 75% y en los años siguientes se mantuvo muy cerca de 60%.⁴⁷

Si bien hubo una erosión del apoyo público a las FFAA a partir del despliegue militar en zonas con mayor presencia militar, los militares se han mantenido en los primeros lugares de las instituciones en que confía la población. Entre instituciones de seguridad, para junio de 2022 el 81.3% de la población mayor de 18 años confiaba en el Ejército y el 84.2% en la Marina, comparado con 70% para la Guardia Nacional, 48.5% para la policía estatal y 42.9% para la policía municipal.⁴⁸ Por otro lado, en 2020 el Ejército fue la institución en la que más confió la población mayor de 15 años, con 63.8% de la población que expresa confiar mucho o algo, cifra que se ubica por encima de la Guardia Nacional con 60.5% y el INE con 59.6%.⁴⁹

⁴⁶ Carlos A. Pérez Ricart y Sabina Morales Rosas, "La militarización, un obstáculo para la gobernanza democrática de la seguridad en México", *Revista colombiana de sociología* 38, n.o 1 (2015): 83-103. <https://bit.ly/3cLV40D>

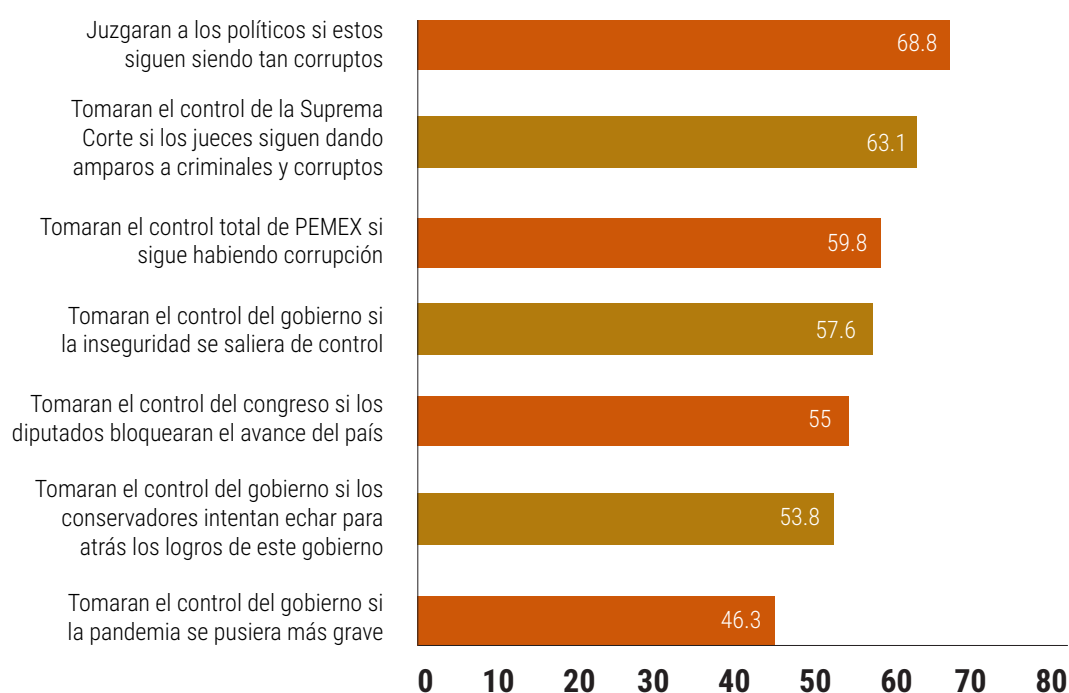
⁴⁷ *World Value Survey (1995-2016)* citado en Alejandro Moreno. "Fuera de los cuarteles: La opinión pública mexicana y las fuerzas armadas". *La Gaceta de Ciencia Política*, 8 de agosto de 2018, <https://bit.ly/3S2UNGY>

⁴⁸ INEGI. Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, Segundo trimestre 2022. 19 de julio de 2022. <https://bit.ly/2Dsu0zB>

⁴⁹ INEGI. Encuesta Nacional de Cultura Cívica 2020. 14 de junio de 2021. <https://bit.ly/3yZqV5J>

En este gobierno, el apoyo ha pasado más allá de una simple confianza en la institución, conforme los discursos enfatizan más la supuesta superioridad de los militares sobre los civiles. De acuerdo con una encuesta realizada en línea por investigadores del CIDE-PPD a personas dentro de municipios con niveles altos y medios de militarización en el país, la población de dichos lugares apoya y considera deseable la participación militar en tareas de seguridad pública, especialmente para enfrentar al crimen organizado: 89.7% de los encuestados apoyan la participación de los militares en el enfrentamiento a carteles, 69.4% en la seguridad pública y 55.3% en la seguridad cotidiana. Asimismo, en una escala del 0 al 100, hay un amplio apoyo a una mayor intervención de las FFAA en el gobierno. En promedio, hay 68.8 puntos de apoyo a que el Ejército juzgue a políticos si siguen siendo corruptos, 63.1 que tomen el control de la Suprema Corte si siguen dando amparos a "criminales y corruptos", 57.6 que controlen el gobierno si se sale de control, 55 que hicieran lo propio con el Congreso si diputados bloquean el avance del país y 53.8 que el Ejército tome el control del gobierno si se revierten logros de este sexenio.⁵⁰

Gráfica 1. En una escala del 1 al 100 qué tan de acuerdo está con que las FFAA...



Fuente: Daniel Zizumbo-Colunga y Benjamín Martínez-Velasco. "Militarización en tiempos de pandemia: Una exploración de las experiencias, percepciones y preferencias de la ciudadanía" *Prorama de Política de Drogas del CIDE*, noviembre de 2021. <https://bit.ly/3M8FaKl>

⁵⁰ Zizumbo-Colunga y Martínez-Velasco. "Militarización en tiempos de pandemia"

Aunque esto no refleja a todo el país, sí muestra una situación preocupante, donde mayorías de la población parecen estar dispuestas a aceptar la imposición de los militares en el Estado. Además, el hecho de que ahora esto ocurra en municipios con alta participación militar muestra que hay amplios sectores de estos territorios que han internalizado los discursos de superioridad militar. La aceptación de estos discursos es muy preocupante, en tanto permite justificar asignarles más tareas en la administración pública a los militares y puede llegar a cambiar las concepciones que tiene la sociedad sobre qué estructuras son deseables en administración pública, como ha ocurrido con la militarización de la seguridad pública. A partir de este precedente, si las ideologías militaristas que celebran la eficiencia y superioridad militar se internalizan, en el futuro la mayor participación militar en la administración pública podría considerarse normal e incluso deseable, al punto que instituciones civiles buscan asemejarse a cuerpos militares.

La percepción de que los militares son superiores no se explica únicamente por la propagación de ciertos discursos por gobernantes civiles. En 2020, meses después de que elementos de la SEDENA tuvieron que liberar a uno de los líderes del cártel de Sinaloa, Ovidio Guzmán, la SEDENA firmó un acuerdo para comenzar una agresiva campaña de comunicación social. Esta campaña, cuyos detalles conocemos por el hackeo de los *Guacamaya Leaks*, buscaba que el Ejército fuera percibido como la institución “más confiable, cercana y respetada por la sociedad”, y consideraba que el fracaso de este operativo y la percepción de militarización en el país eran algunas de las principales amenazas a esta percepción. La campaña estuvo integrada por buscar la aparición de militares en películas y series de televisión, la apertura de cuarteles para que entrara la población y la participación en distintos eventos públicos, con el objetivo de modificar las percepciones de la población.⁵¹ Si bien el efecto de este tipo de esfuerzos sobre las percepciones civiles no ha sido cuantificado, esta campaña muestra que la propagación de la idea de que las instituciones castrenses son las más capacitadas y confiable es atribuible a los propios y deliberados esfuerzos de éstas para promover esa imagen.

51 Silber Meza. “Sedena buscó mejorar imagen tras Culiacanazo: Guacamaya Leaks”. *El Universal*, 18 de octubre de 2022. Consultado el 8 de febrero de 2023. <https://bit.ly/3DSiMmU>

Militarismo en la administración pública

El crecimiento de la percepción de que los militares son más capaces y están más preparados que los civiles, aunado a la influencia de las propias instituciones castrenses, ha llevado a que gobernantes civiles recurran a asignarle a militares funciones civiles más allá de la seguridad pública, con el fin de dar la impresión de gobernabilidad y control sobre distintas áreas de la administración pública. De acuerdo con el Inventario Nacional de lo Militarizado, un estudio de investigadores del PPD-CIDE basado en información pública, entre 2007 y 2021, el gobierno federal transfirió por lo menos 127 funciones civiles a las FFAA. De éstas, 70 corresponden al sexenio de Andrés Manuel López Obrador y con ellas, el gobierno ha asignado personal militar no solo en la operación de las tareas transferidas sino también en su dirección. Este es el caso de la administración de puertos y aduanas en el país. Todas estas nuevas funciones con frecuencia han implicado transferencias presupuestales hacia las FFAA, sin que aumenten sus responsabilidades de transparencia.⁵²

Muchas de estas nuevas funciones las ha transferido el presidente gracias a reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública, que le han permitido disponer más de las FFAA para tomar funciones que le corresponden al ejecutivo. Por medio de este mecanismo, el presidente ha aprovechado que la Secretaría de Salud es una dependencia del ejecutivo y ha ordenado que militares participen en la vacunación de personas, la construcción de hospitales y la supervisión de instituciones sanitarias. Por este medio, el presidente podría aumentar la participación de militares en tareas de educación, el ordenamiento territorial, el bienestar u otros temas que estén a su cargo, donde considere necesario sustituir a la administración pública civil por militares.⁵³

Otro ejemplo preocupante de esta situación es la entrega de los proyectos de infraestructura a los militares. Los militares han participado en tareas de construcción de sucursales de Bancos de Bienestar, que son la principal manera en la que se distribuyen apoyos sociales bajo el gobierno, y en la construcción de hospitales. Sin embargo, el efecto es todavía más notable con proyectos prioritarios como el Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Desde que anunció el proyecto en 2018, el presidente ordenó que los militares se encargaran de su construcción sobre la base aérea de Santa Lucía, por lo que han participado tanto ingenieros militares, como soldados en su construcción.

⁵² Sara Velázquez, Estefanía Álvarez, Catalina Pérez Correa, Alejandro Madrazo, *Inventario Nacional de lo Militarizado*. Una radiografía de los procesos de militarización en México. Programa de Política de Drogas del CIDE, 17 de septiembre de 2021, consultado el 15 de abril de 2022, <https://bit.ly/3lok0X5>

⁵³ José Ramón Cossío Díaz, "Las consecuencias imprevistas del militarismo en México", *Gato Pardo*, 19 de enero de 2021, <https://bit.ly/37SIGJU>

El aeropuerto tiene un presupuesto estimado de 75 millones de pesos, se inauguró el 21 de marzo de 2022 y además de que los militares manejaron estos recursos, también encabezan su administración, por medio de una empresa llamada Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles S.A. de C.V, las acciones de la cual serán para la SEDENA y Banjercito.⁵⁴

Con respecto al Tren Maya, el presidente anunció que la Secretaría de Defensa Nacional quedaría a cargo de la construcción y operación de todo el proyecto. Para éste, el presupuesto destinado ha superado las expectativas iniciales, se han gastado 180 mil millones de pesos de los 141 mil millones proyectados. La SEDENA no solo quedará a cargo de la administración del tren, las potenciales utilidades del proyecto también serán destinadas totalmente a los militares, para aspectos como sus pensiones. Rogelio Jiménez Pons, el director del FONATUR, admitió abiertamente que esto tiene una razón política: mientras el tren esté en manos de los militares, en el futuro será todavía más difícil que el proyecto se privatice.⁵⁵ El hecho de que el gobierno admita esta lógica muestra que están conscientes de un hecho lamentable en el país: una vez que un proyecto o función es entregada a los militares, es muy difícil que un gobierno futuro se las quite.

Los militares como actor político

Por último, está la participación de militares como un agente que actúa con cada vez mayor autonomía para perseguir sus intereses y proteger a sus elementos. En la seguridad pública, donde la militarización está más establecida, las FFAA han actuado más como un partido, cabildeando por leyes que establezcan su participación y les den inmunidad, oponiéndose a las acciones de gobiernos civiles que buscan castigar a sus elementos. Durante el sexenio de Felipe Calderón, Guillermo Galván Galván, el entonces Secretario de Defensa Nacional, apoyó las reformas que normalizaban la participación de los militares y ampliaban sus facultades en tareas de seguridad pública y se pronunció a favor de éstas en eventos públicos y frente a Senadores de la Comisión de Seguridad.⁵⁶ Y aunque reformas legales como la Ley de Seguridad Nacional no prosperaron, la idea de que este marco regulatorio era necesario continuó entre las élites militares. Por lo tanto, el apoyo público por el titular de la SEDENA a la creación de este marco fue mucho más abierto en el siguiente sexenio.

⁵⁴ Carrillo, Emmanuel. "El Ejército, el gran constructor de la 4T; AMLO le encarga 2 obras más". Forbes México, 25 de febrero de 2022. <https://bit.ly/3rvlqZu>

⁵⁵ Reina, Elena. "López Obrador le otorga más poder al Ejército: el Tren Maya será patrimonio militar". El País México, 18 de marzo de 2021. <https://bit.ly/3jH7Aiv>

⁵⁶ Víctor Ballinas. "Aprobar la Ley de Seguridad Nacional, insiste el general Galván ante senadores", *La Jornada*, 10 de noviembre de 2011. <https://bit.ly/3l59Qfb>

Así, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, el Secretario de Defensa Nacional, el General Salvador Cienfuegos, tuvo una participación activa en medios sobre la importancia de pasar la Ley de Seguridad Interior para regular y normalizar la participación de militares y proteger a la institución de críticas y acusaciones por violaciones a los derechos humanos, que él percibía manchaban la imagen de la institución. Por ello, apoyó la aprobación de esta ley, que pretendía regular la participación militar y protegía a los militares de consecuencias por violaciones a derechos humanos, e incluso amenazó con retirar a los militares de las calles si el gobierno no la aprobaba. Al final, estas presiones empujaron al gobierno a aprobar dicho ordenamiento, el cual permitía que el presidente dispusiera de las FFAA de manera arbitraria y sin control de otros poderes si consideraba que había una “amenaza a la seguridad interior”.⁵⁷

Dentro de la administración de Andrés Manuel López Obrador, el papel político de las FFAA ha sido notable como aliadas del proyecto político del gobierno. El 20 de noviembre de 2021, en conmemoración de la Revolución, el Secretario de Defensa, Luis Cresencio Sandoval, se pronunció en un discurso a favor del proyecto de la “Cuarta Transformación” del presidente, llamó a la población a unirse a éste y reafirmó el compromiso de las FFAA para cumplir las distintas funciones que les ha asignado este gobierno.⁵⁸ Así, los militares han salido a apoyar abiertamente el proyecto político del gobierno, el cual les ha entregado casi totalmente la seguridad pública del país, ha aumentado considerablemente sus presupuestos y abiertamente les entrega la dirección de grandes proyectos para evitar que en el futuro se privaticen.

Los militares también participaron en la discusión de las más recientes reformas en materia de seguridad pública. Documentos revelados por el grupo de hacktivistas de Guacamaya revelan que la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Defensa Nacional le presentó al ejecutivo varias alternativas de reformas para fortalecer y volver transexenal su control sobre la Guardia Nacional, y que la iniciativa que el presidente envió al Congreso para entregar al Ejército el control sobre la Guardia Nacional solo tuvo cambios menores con respecto a una de estas propuestas.⁵⁹ Asimismo, senadores de oposición como Dante Delgado denunciaron que los Secretarios de Defensa y de Marina los presionaron para apoyar la reforma constitucional para permitir la presencia militar en las calles hasta 2028.⁶⁰ Esto implica que la SEDENA intervino directamente en la elaboración y promoción de reformas que fortalecen su control sobre tareas de seguridad pública, con el consentimiento del gobierno civil.

⁵⁷ Lisa María Sánchez Ortega. *La Militarización de la Seguridad Pública en México y sus fundamentos legales*. Paz y Seguridad. Bogotá Colombia: Friedrich-Ebert-Stiftung, noviembre de 2020. <https://bit.ly/3v580dl>

⁵⁸ Redacción Aristegui Noticias. “Es necesario estar unidos en el proyecto de nación que está en marcha”: Luis Cresencio Sandoval”. *Aristegui Noticias*, 20 de noviembre de 2021. <https://bit.ly/3b7omq6>

⁵⁹ San Martín, Neldy. “Sedena Leaks: El Ejército, autor de la reforma para controlar a la Guardia Nacional”. *Proceso*, 5 de octubre de 2022. <https://bit.ly/3VhGq33>

⁶⁰ Redacción Político MX. “Dante Delgado acusa de “prácticas mezquinas” a titulares de Segob, Sedena y Marina contra senadores de oposición”. *Político MX*, 21 de septiembre de 2022. <https://bit.ly/3Comgf5>

De esta manera, los militares han mantenido una capacidad de influir en el proceso político para que se militarice la seguridad pública en los términos que más prefieran. Al mismo tiempo, las FFAA mantienen la capacidad de cabildear para que el gobierno proteja a sus élites de enfrentar consecuencias legales, incluso cuando ya no están en el poder. Cuando el General Salvador Cienfuegos fue capturado por autoridades estadounidenses y acusado de narcotráfico y lavado de dinero, el gobierno mexicano expresó su descontento por no ser avisado de la investigación. Un mes después de esta detención, amenazó al gobierno estadounidense con expulsar a sus agentes si no lo liberaban, y logró que lo regresaran a México, supuestamente para investigar el caso. Unos meses después, la Fiscalía terminó con la investigación en su contra, afirmando que no encontró ninguna prueba de que se reunió con los traficantes con los que el gobierno americano lo había acusado de conspirar, a pesar de las más de 700 páginas del expediente contra el ex Secretario de Defensa.⁶¹

Con este propósito también se han llegado a resistir a revelar información comprometedor para sus elementos. Su capacidad para proteger a sus elementos tanto antes como después de este gobierno está ejemplificado en la investigación de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. En la versión oficial, los miembros del 27° Batallón de Infantería afirmaron que solo siguieron la situación que resultó en la desaparición de los 43 estudiantes, pero miembros de las familias de esos estudiantes acusaron a soldados de participar en la desaparición y mentir en sus declaraciones. Cuando en 2015 la Corte Interamericana de Derechos Humanos recomendó que se interrogara a los soldados que participaron en la desaparición, el General Cienfuegos afirmó que no permitiría que interrogaran a uno solo de sus soldados pues implicaba tratarlos como criminales.⁶²

A partir del Informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes basado en archivos militares, conocemos el grado al que participaron los militares en la desaparición. Ahora sabemos que los militares no solo sabían lo que estaba pasando y participaron en la tortura de los estudiantes, sino que también tenían a estudiantes infiltrados en la Escuela Normal desde antes de la desaparición e incluso hubo marinos que alteraron el basurero donde, según la versión oficial, se quemaron los cuerpos de los estudiantes. También sabemos que los militares no han querido revelar toda la información del caso. Desde 2018 el presidente ordenó a las FFAA que entregaran toda la información sobre el caso; sin embargo, el informe revela que los militares no solo se han resistido a liberar estos archivos, también siguen ocultando información.⁶³ Así, incluso frente a un gobierno que les ha entregado funciones y presupuestos, el control de los militares está muy limitado.

⁶¹ Luis Pablo Beauregard. "Exonerado Cienfuegos, el general investigado por narcotráfico y que provocó un choque entre EE UU y México". *El País México*, 15 de enero de 2021. <https://bit.ly/3v6HsEe>

⁶² Redacción. "Tlatlaya y Ayotzinapa: los casos que persiguen al Ejército con Cienfuegos". *Expansión Política*, 16 de octubre de 2020. <https://bit.ly/3rIKoVe>

⁶³ Centro Prodh. "Ayotzinapa: nuevo informe del GIEI". *Animal Político*, 30 de marzo de 2022. <https://bit.ly/3xLHBP9>

Conclusión

En México, hemos visto un proceso de militarización que comenzó en la seguridad pública, que crecientemente está pasando otras áreas de la administración pública y que siempre ha estado acompañado de ideologías militaristas. En un primer momento, el proceso estuvo guiado por discursos que adoptaban enfoques y concepciones bélicas de la situación de inseguridad en México, planteándola como una Guerra, para justificar que los militares eran el cuerpo más apto para llevar a cabo tareas de seguridad pública. A pesar del fracaso de esas políticas, estas ideas se han infiltrado en el imaginario público sobre legitimidad y seguridad pública en distintos niveles del gobierno, lo que ha llevado a que las policías empiecen a asimilarse a sus contrapartes militares. Si bien es difícil evaluar qué tanto se infiltraron estos valores en la sociedad, sabemos que el apoyo a los militares continuó y que, hasta el día de hoy, hay sectores que consideran que su participación en seguridad pública es deseable.

En el nuevo gobierno, la ideología militarista perpetuada por discursos oficiales celebra las cualidades de honestidad y eficiencia en los militares, y los ve como un cuerpo necesario para el proyecto político del gobierno actual. Acompañado a esto, las propias autoridades militares han llevado a cabo un esfuerzo por limpiar y promover su imagen como más capaces y confiables que las autoridades civiles. Los gobiernos de distintos niveles han aprovechado este discurso para entregarles diversas tareas de administración pública, como la administración de aduanas y megaproyectos de desarrollo. Este nuevo discurso parece estar siendo recibido de manera positiva por algunos sectores de la población, al punto que podrían incluso apoyar una mayor participación de las FFAA en la política. Por su parte, la existencia de este discurso ha llevado a un aumento sin precedentes en las funciones, recursos y prerrogativas asignadas al Ejército, sin que éste tenga que exigir estos aumentos de manera pública, y a que el gobierno proteja a los altos mandos de acusaciones graves, incluso si eso genera tensiones con otros países como Estados Unidos. Al mismo tiempo, los altos mandos militares han expresado abiertamente su apoyo al proyecto político de este gobierno, mostrándose comprometidos con ser un pilar de la “Cuarta Transformación” mientras implique aumentar sus tareas y presupuestos. Sin embargo, cuando el gobierno les ha pedido apoyo para rendir cuenta por crímenes cometidos por sus elementos, se resisten a cooperar y ocultan información, actuando de manera similar a gobiernos pasados.

Todo esto muestra que el control que el mismo presidente tiene de las FFAA es limitado y que la reproducción de discursos que celebran la superioridad militar sobre los civiles y el aumento de sus espacios de autonomía harán que en el futuro sea cada vez más difícil detener la militarización y regresar a los militares a los cuarteles. Este proceso ya está representando riesgos fundamentales para las instituciones civiles democráticas. La toma de decisiones dentro del país continúa siendo por gobernantes civiles, pero los militares ya son capaces de influir en la creación de las leyes que regulan su participación en tareas de seguridad, violando el principio de supremacía civil. El militarismo ya existe en México, y desgraciadamente, podría pasar a otras áreas. Tan fácil como los militares han pasado a realizar otras tareas del gobierno civil, su influencia y participación en la toma de decisiones podría pasar a otras áreas del gobierno e incluso de la sociedad. Los precedentes en la región muestran que, si el militarismo se establece, podríamos enfrentar un grave retroceso democrático.

Esta publicación forma parte de la serie “La militarización de la vida y la seguridad pública: amenazas a la estabilidad democrática y la paz en México” elaborada por MUCD. En esta serie se exploran diversos aspectos de la militarización de la seguridad y la vida pública en el país, como el militarismo, el debilitamiento de la vía civil, la impunidad de las violaciones de derechos humanos cometidas por militares, la opacidad y los riesgos a la democracia que genera la militarización.

México Unido Contra la Delincuencia

Fecha de publicación: abril 2023

Coordinadoras: Lisa Sánchez y Frida Ibarra

Autor: Alejandro Ravelo

Contacto: comunicacion@mucd.org.mx

www.mucd.org.mx

